

C.A. de Santiago

Santiago, siete de junio de dos mil veinticuatro.

Al escrito folio 17, estése a lo resuelto.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1º) Que los abogados señores Jorge Sebastián Delpiano Torrealba y Carlos Rodrigo Frías Tapia, ambos domiciliados en avenida Vitacura N° 2939, piso 8, comuna de Las Condes, en representación de SoyFocus Administradora General de Fondos S.A., domiciliada en General Calderón N° 121, piso 1, comuna de Providencia, deducen un reclamo de acuerdo al artículo 24 de la ley 19.913 en contra de la Resolución Exenta D.J. N° 117-266-2023 dictada en procedimiento sancionatorio de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que impuso a su parte las sanciones de amonestación escrita y multa de 30 unidades de fomento, por las siguientes infracciones: a) incumplimiento de la obligación consistente en “lo indicado en el artículo 5° de la ley 19.913 y en el Título I de la Circular UAF N° 49, de 2012, de la Unidad de Análisis Financiero, en relación a la obligación de registro y envío de operaciones sobre US\$10.000 que realmente se hayan materializado en efectivo...”; y b) incumplimiento a la obligación indicada en “la Circular UAF N° 57, letra d) del artículo segundo, en cuanto a que el sujeto obligado debe tomar medidas razonables para verificar la información declarada por el cliente persona jurídica referente a su(s) beneficiario(s) final(es), pudiendo siempre solicitar al mismo cliente documentación adicional, o recurrir a otras fuentes legales de información para verificar, dentro de sus posibilidades organizacionales y legales, la veracidad de lo declarado por el cliente”. Expresan lo siguiente:

1.- Mediante la resolución que indica, la UAF le formuló los cargos, ya referidos, que luego sirvieron de fundamento a las sanciones.

2.- Su parte presentó descargos:

a) En cuanto a la primera infracción imputada, la operación a la que la UAF atribuye la condición de operación en efectivo, consistió en el depósito en efectivo de \$35.000.000 realizado el 6 de enero de 2022 en la cuenta corriente de su parte en el banco Itaú, y, sobre este hecho, señala que lo cierto es que no fue una operación directamente efectuada entre su parte y uno de sus clientes/aportantes de fondo mutuo gestionado por aquella, sino que correspondió al depósito en dicho banco efectuado por el cliente. De



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RQEXYWXWX

esta forma, el cliente/aportante no concurrió a sus oficinas a entregar una suma de dinero en efectivo, con la idea de que posteriormente su parte efectuase un depósito de esa cantidad en su propia cuenta bancaria. Respecto a la operación misma, el cliente estaba en conocimiento que debía traspasar dichos fondos a la cuenta de su parte mediante transferencia electrónica de fondos y no en efectivo, operación que efectuó por sí mismo el 6 de enero de 2022. Así, la operación que la UAF atribuye como operación en efectivo tuvo lugar ante el banco Itaú, entidad que, de acuerdo a lo regulado en la ley, es la encargada de enviar el reporte de operación en efectivo, que se echa en falta.

b) En cuanto a la segunda infracción, en lo que respecta al cliente Global Media S.A., la UAF no ahonda en forma pormenorizada para fundar la afirmación relativa a que las medidas razonables para constatar la identidad de los beneficiarios finales no fueron suficientes. La sección 2.1.6 del Informe de Verificación de Cumplimiento señala que, respecto a esta obligación, esto es, verificar la declaración de beneficiario final, su parte la cumple mayoritariamente.

3.- Se expone luego el reclamante en exponer la prueba rendida respecto de las dos infracciones.

4.- Entienden que el acto recurrido es ilegal por cuanto el actuar de la UAF transgrede el principio de debido proceso, según se encarga de explicitar. Refiere, en efecto, que las conclusiones a las que arriba la UAF están desprovistas de racionalidad y, por ende, carecen de motivación.

5.- También se ha vulnerado el principio de juridicidad o legalidad al haberse dictado un acto administrativo que carece de la motivación necesaria.

Piden que se acoja su reclamación y se dejen sin efecto las sanciones impuestas.

2º) Que el director (s) de la UAF, señor Marcelo Contreras Rojas, domiciliado en calle Moneda N° 975, piso 17, comuna de Santiago, informa lo que sigue:

1.- La ley 19.913 facultó a la UAF para implementar y difundir el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, fiscalizar el cumplimiento de la normativa antilavado y otras que enumera.



2.- La letra f) del artículo 2° de la ley 19.913 señala lo que sigue: “La Unidad de Análisis Financiero tendrá las siguientes atribuciones y funciones, las que podrá desarrollar y ejercer en cualquier lugar del territorio nacional: f) Impartir instrucciones de aplicación general a las personas enumeradas en los artículos 3°, inciso primero, y 4°, inciso primero, para el adecuado cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Párrafo 2° de este Título, pudiendo en cualquier momento verificar su ejecución. Con todo, la Unidad de Análisis Financiero estará facultada para dictar instrucciones diferenciadas y proporcionales para distintos tipos de sujetos obligados, atendiendo la naturaleza de las operaciones que éstos realicen y en consideración a los riesgos efectivos a que están expuestos esos sujetos de ser empleados para la comisión de los delitos a que se refiere el artículo 27 o el artículo 8 de la ley N° 18.314”.

“Para efectos de lo dispuesto en el párrafo precedente, la Unidad de Análisis Financiero podrá evaluar la ejecución de la ley y la normativa aplicable por parte de las personas descritas precedentemente, aplicando un enfoque basado en riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Asimismo, supervisará la adecuada gestión de dichos riesgos. Con este fin, la Unidad de Análisis Financiero podrá requerir todos los datos y antecedentes que le permitan llevar a cabo dicha labor, así como aprobar matrices de riesgo generales para los sectores económicos señalados en el inciso primero del artículo 3° de la presente ley. La información entregada a la Unidad de Análisis Financiero, así como la evaluación de los antecedentes y su utilización durante el proceso de fiscalización, tendrán el carácter de información reservada”.

Lo anterior se lleva a cabo a través de la dictación de circulares.

3.- El Título II de la citada ley 19.913 faculta a la UAF a iniciar procedimientos administrativos sancionatorios en contra de los sujetos obligados que incumplan las disposiciones legales y normativas que al efecto se hayan dictado con carácter de obligatorio para ellos.

4.- En cuanto a los fundamentos del reclamo, refiere que la empresa reclamante tiene una cuenta corriente en el banco Itaú, de modo que ante un depósito en dicha cuenta, tanto el banco como la titular de la cuenta tienen el deber de reportar la operación. El depósito se hizo en la cuenta de SoyFocus Administradora General de Fondos S.A. y no en una perteneciente al



depositante. Y frente a pruebas documentales que demostraban que el depósito fue en efectivo, se la prefirió a los testigos mencionados por la reclamante, que saben lo que declararon por los dichos del cliente.

5.- En lo que hace a la segunda infracción, la formulación de cargos se refiere con precisión al punto 2.1.6 del Informe de Verificación de Cumplimiento, donde se contiene el cuadro con las falencias en la información, por lo que la empresa reclamante ha tenido total y pleno conocimiento de los hechos que fundan la infracción.

Pide el rechazo de la reclamación, con costas.

3º) Que el artículo 24 de la ley 19.913 señala lo que sigue: “Los afectados por resoluciones de la Unidad que se originen en el procedimiento sancionatorio reglado en esta ley, que estimen que éstas no se ajustan a derecho, podrán deducir reclamo en contra de las mismas, dentro del plazo de diez días, contado desde la notificación del acto, ante la Corte de Apelaciones correspondiente al domicilio del sancionado”.

“Las sanciones que impongan multa serán siempre reclamables y no serán exigibles mientras no esté vencido el plazo para interponer la reclamación, o ésta no haya sido resuelta”.

“Una vez acogida a tramitación, la Corte de Apelaciones dará traslado de la reclamación a la Unidad, otorgándole un plazo de diez días para formular sus observaciones, contado desde que se notifique la reclamación interpuesta”.

“Evacuado el traslado por la Unidad, o vencido el plazo de que dispone para formular observaciones, el tribunal ordenará traer los autos en relación y la causa se agregará extraordinariamente a la tabla de la audiencia más próxima, previo sorteo de la Sala”.

“La Corte podrá, si lo estima pertinente, abrir un término probatorio que no podrá exceder de siete días, y deberá escuchar los alegatos de las partes si una de éstas los pide”.

“La Corte dictará sentencia dentro del término de quince días”.

“Contra la resolución de la Corte de Apelaciones se podrá apelar ante la Corte Suprema, dentro del plazo de diez días, la que conocerá en la forma prevista en los incisos anteriores”.

4º) Que se trata, la reclamación que consagra el artículo anterior, de un arbitrio que le permite a la judicatura la revisión de la legalidad de lo



obrado por la Administración y, por ende, no se trata de un recurso que permita rever los hechos y el derecho, como si de una apelación se tratara.

5º) Que, desde luego, no se observa ilegalidad alguna en el obrar de la UAF. No están cuestionadas las facultades por las cuales inició el procedimiento sancionador, ni aquellas que le permitieron imponer las sanciones a que se ha hecho referencia. Y en cuanto a las imputaciones que hace la sociedad reclamante, cabe señalar lo siguiente:

1.- En lo que se refiere al primer cargo, como bien señala la UAF, el Informe de Verificación de Cumplimiento (IVF) N° 63 de 2022 da cuenta de la revisión de la cartola de la cuenta corriente que la reclamante mantiene en el banco Itaú, cartola en la que consta que el de enero de 2022 se hizo un depósito en efectivo por \$35.000.000, la que no fue incluida en el reporte ROE (Reporte de Operaciones en Efectivo).

2.- Dicha cuenta no era del depositante sino de la sociedad que reclama. Y la UAF, para dar por establecida la existencia del hecho por el cual se sanciona SoyFocus, tuvo en cuenta la referida cartola bancaria y la boleta de depósito N° 9117815. Y, es cierto, los testigos presentados por SoyFocus dan una versión de los hechos que llevaría a concluir que la operación, en realidad, no fue en efectivo.

3.- Sin embargo, la UAF, en uso de sus facultades, ponderó toda esta evidencia y le dio mayor valor a la prueba documental que a la testimonial, razonando sobre el particular, de modo que el vicio que se denuncia no existe: la Administración ha entregado fundamentos racionales para dar por acreditado este primer cargo y, consecuentemente, sancionar a SoyFocus. Y habrá que reiterarlo, no es esta Corte, para estos efectos, una segunda instancia de las decisiones de la autoridad sancionadora.

4.- En cuanto al segundo cargo, el mencionado IVC N° 63 de 2022 contiene un cuadro con declaraciones de beneficiarios finales con errores en la información entregada, incumpliendo así SoyFocus lo ordenado en la letra d) de la Circular de la UAF N° 57, esto es, no adoptó las medidas razonables para verificar la información recibidas en las declaraciones de los beneficiarios finales.

5.- Sobre este particular, no existe la contradicción que denuncia el reclamante, la que no fue sancionada por no solicitar las aludidas declaraciones, sino por no revisarlas, revisión que habría llevado a la



conclusión por parte de SoyFocus que existían inconsistencias y falencias, las que se detectaron en la fiscalización.

6.- Nuevamente, al igual que en el primer cargo, la UAF ejerció sus facultades y reglamentarias y no se advierte en ello ilegalidad alguna, pues entregó los fundamentos por los cuales tuvo por demostrada la existencia del segundo cargo e impuso, en consecuencia, la sanción que se reclama. Nuevamente, se analizó la prueba rendida y la UAF fundó su ponderación, de modo que no se advierte la ilegalidad que arguye SoyFocus.

6°) Que, en estas circunstancias, sólo procede desestimar la reclamación.

Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 24 de la ley 19.913, **se rechaza**, sin costas, la reclamación deducida en estos antecedentes.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del ministro señor Mera.

N°Contencioso Administrativo-15-2024.

Pronunciada por la **Séptima Sala** de la ltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Juan Cristóbal Mera Muñoz e integrada por el Ministro señor Tomás Gray Gariazzo y por la Abogada Integrante señora Claudia Candiani Vidal.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RQEXXYWXWX

Pronunciado por la Séptima Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Juan Cristobal Mera M., Tomas Gray G. y Abogada Integrante Claudia Candiani V. Santiago, siete de junio de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a siete de junio de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RQEXXYWXWX